San Luis de la Paz, Guanajuato., 21 veintiuno de octubre de 2022 dos mil veintidós.-

**VISTOS.-** Para resolver los autos de la Demanda de Juicio de Nulidad Expediente Número 40/2022, promovido por el ciudadano \*\*\***,** ha llegado el momento de resolver lo que en derecho proceda y.------------------------------------------------------------------------

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Con fecha 8 ocho de agosto del año 2022 dos mil veintidós, el ciudadano  **\*\*\*,** promovió Demanda de Juicio de Nulidad en contra del Oficial adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte Municipal de esta ciudad y árbitro calificador, sobre el acto administrativo traducido en la boleta de infracción número 178237 de fecha 11 once de junio de 2022 dos mil veintidós, solicitando la nulidad de la misma en los términos del artículo 255 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.--------------------------------------------------

**SEGUNDO.-** Por auto de fecha 9 nueve de agosto del año que transcurre, se radicó y requirió a las autoridades responsables para que, en el término de 10 diez días, dieran contestación a la demanda interpuesta en su contra, lo anterior de conformidad con el artículo 279 del Código que regula a esta materia, quedando el actor y la autoridad demandada debida y respectivamente notificados el día 10 diez y 11 once de agosto de 2022 dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------

**TERCERO.-** Por auto de fecha 25 veinticinco de agosto de la presente anualidad, se tuvo a la parte demandada por dando contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra, lo anterior de conformidad con el artículo 279 del Código que rige a la materia.-----------------------------------------------------------------------------------

**CUARTO.-**  Por auto de fecha 8 ocho de septiembre del año que pasa, se tuvo al justiciable por ampliando la demanda de juicio de nulidad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el diverso 284 del Código que norma este Juzgado.------------

**QUINTO.-**  Por auto de fecha 26 veintiséis de septiembre del presente año, se tuvo a la demandada por dado contestación a la ampliación de demanda, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 285 del Código que norma este Juzgado.-

**SEXTO.-** En fecha 10 diez de octubre del año que corre, se celebró la Audiencia de Alegatos, con la formulación de apuntes de alegatos del actor, lo anterior de conformidad con los artículos 287 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.------------------------------

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que este Honorable Juzgado Administrativo Municipal está dotado de competencia para tramitar y resolver la presente demanda de juicio de nulidad, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 244 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y el artículo 1 fracción II, del Código de Justicia Administrativa que norma a este Órgano Jurisdiccional.----------------------------

**SEGUNDO.-** Que la existencia del acto reclamado se encuentra debidamente acreditado en autos, por las documentales exhibidas por el recurrente.------------------

**TERCERO.-** Las causales de improcedencia y sobreseimiento se analizan a petición de parte, o en su defecto, de oficio por ser cuestiones de orden público, lo anterior atento a lo dispuesto por los numerales 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sirve de apoyo la siguiente Tesis Jurisprudencial.-

“***SOBRESEIMIENTO, MOTIVOS DE****. La configuración de motivos de sobreseimiento, como sucede cuando se justifica que concurrieron causas de improcedencia, además de impedir el examen de fondo del negocio, debe estudiarse oficiosa y preferentemente, por referirse a una cuestión de orden público en el juicio de garantías.” Visible en la Jurisprudencia Tesis sobresaliente 1982-1983, actualización VIII administrativa, pág. 132, Tesis 182. Ediciones Mayo.*

***“IMPROCEDENCIA.-*** *Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías” Tesis jurisprudencial número 940, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 – 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, visible en la pág. 1538.*

Además de la boleta de infracción de fecha 11 once de junio de 2022 dos mil veintidós, el actor también demandó el recibo de pago 14 catorce de junio de 2022 dos mil veintidós, luego entonces, este juzgador se avocará al estudio del ulterior acto administrativo.

Es palmario que el recibo de pago tiene fecha de 14 catorce de junio de 2022 dos mil veintidós, luego entonces, cuando el actor promovió la demanda de juicio de nulidad fue en fecha 8 ocho de agosto de 2022 dos mil veintidós, luego entonces el justiciable incoó demanda en el término de los treinta días que estipula el diverso 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

No encontrando alguna causal que impida el estudio de fondo del presente asunto, se procede a analizar los conceptos de violación aducidos por el actor en su libelo de Demanda de Juicio de Nulidad.-----------------------------------------------------------------------

**CUARTO.-** La parte actora expresó sus conceptos de violación contenidos en el escrito inicial de Demanda de Juicio de Nulidad, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, toda vez que, no es necesaria su transcripción; sirve de apoyo a lo anterior la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 501 del Tomo XIV- Julio, de la Octava Época del Seminario Judicial de la Federación que a continuación se transcribe:

*“****CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.-*** *El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido con las disposiciones de la Ley de Amparo, la cual sujeta a su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado de que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estima pertinente para demostrar, en su caso la ilegalidad de la misma.”*

No obstante lo anterior, este Juzgador, estima precisar substancialmente lo que las partes expresaron en sus respectivos escritos, y así tenemos que el demandante señala:

“PRIMERO…

SEGUNDO.- Ahora bien, manifiesto que me genera evidente perjuicio el acto de autoridad consistente en la calificación de la multicitada acta de infracción por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), ya que, si la boleta de infracción esté viciada de nulidad por encontrarse indebidamente fundada y motivad, consecuentemente la calificación de dicha infracción resultará también nula, al ser fruto de un acto viciado de origen.

Asimismo, destaco que el acto de autoridad consistente en la calificación de la multicitada acta de infracción de la multicitada acta de infracción no cumplió con lo establecido en las (sic) fracción VI del numeral 137 del código de la materia, pues la autoridad encargada de calificar el acta de infracción jamás me explicó los motivos especiales que se tomaron en cuenta para determinar el monto, lo cual es un requisito inherente a todo acto administrativo que emitan las autoridades, ya que únicamente **se indicó de manera verbal** que la multa ascendía a la cantidad referida, pero sin dar por escrito el tabulador de sanciones se consigne que la conducta imputada ascendía a tal cantidad, lo que hace suponer que la determinación del monto fue al libre albedrio de la autoridad calificadora, situación que no puede ser legalmente válida, ya que me dejó en un total y absoluto estado de indefensión, al no conocer las razones de hecho y de derecho que tuvo el delegado calificador para determinar tal cuantía…”

La recurrida, en la contestación de demanda manifestó lo siguiente:

“PRIMERO.- Con respecto a este concepto de ampliar su escrito inicial de demanda, manifestamos, reiteramos que dicho escrito fue presentado fuera del término de 30 días hábiles para que se le diera curso a la demanda correspondiente, toda vez que reiteramos el término inició para el actor del 13 de junio de 2022 y concluyo el día 05 cinco de agosto del año en curso.

SEGUNDO.- Es infundado el agravio que alegar el actor, toda vez que lo hemos manifestado dicho escrito esta presentado fuera del término legal…

El recurrente en la ampliación de demanda manifestó lo siguiente: “PRIMERO.- Manifiesto que la boleta de infracción no cumplió con el elemento de validez establecido en la fracción VI del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, toda vez que se encuentra **indebidamente fundada y motivada**.

Se asevera lo anterior, ya que en primer lugar **niego lisa y llanamente** que quien suscribe haya actualizado al (sic) conducta que se me pretende imputar.

La ilegalidad del acto resulta evidente, pues la autoridad fue **omisa** en plasmar y detallar la razón de cómo fue que concluyó o de qué manera detectó que supuestamente había incurrido en alguna conducta que ameritara una infracción de este tipo, pues no señaló si lo detectó con sus sentidos, derivado de una denuncia ciudadana o por algún otro medio de convicción, omitiendo señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas de cómo concluyo que quien suscribe cometí la conducta.

Circunstancias que resultaban completamente necesarias para acreditar la razón de su dicho, pues el simple hecho de haber señalado la supuesta conducta que según el actualizaba, no prueba que la conducta haya sido realmente cometida.

Consecuentemente, al no existir una debida motivación, la fundamentación invocada también resultara indebida, ya que no exista adecuación entre los motivos expuestos y los preceptos legales invocados, requisito necesario *sin qua non* para tener por legalmente válido el acto de autoridad. Por lo que deberá dictarse la nulidad total del mismo.

Así mismo, el solo realiza una leyenda con puño y letra de la autoridad que lo emitió, en un apartado que dice “EN PARADA DE AUTOBUS” de ningún modo surte una debida motivación del acto aunado al hecho de que no existe razonamiento lo suficientemente claro y congruente que permita aseverar con toda certidumbre que quien suscribe haya desplegado una conducta susceptible de ser calificada como falta administrativa; tampoco pormenoriza respecto a las circunstancias especiales que lo condujeron a emitir el acto impugnado; menos aún expresa el precepto legal que según se apreciación fue transgredido…

Por ello es que se afirma la ilegalidad de la boleta ya que encuadra en el supuesto descrito en la fracción IV del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Además, lógico resulta afirmar que el acto en cuestión –como antes lo se manifestó- carece del elemento de validez contenido en la fracción VI del artículo 137 del Código de la materia, pues para tener por acatando este requisito la autoridad demandada, debió señalar en forma precisa la hipótesis jurídica en la que incurrió el de la voz, haciendo una adecuación entre lo previsto por la norma y el actuar del gobernado, estableciendo al efecto un razonamiento lógico-jurídico.

Bajo este tenor, queda claro que si la boleta de infracción se encuentra indebidamente fundada y motivada, esta determinación resulta violatoria del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 137 del Código de la materia, pues para tener por acatado este requisito la autoridad demandada, debió señalar en forma precisa la hipótesis jurídica en la que incurrió el de la voz, haciendo una adecuación entre lo previsto por la norma y el actuar del gobernado, estableciendo al efecto un razonamiento lógico-jurídico.

Bajo este tenor, queda claro que si la boleta de infracción se encuentra indebidamente fundada y motivada, esta determinación resulta violatoria del artículo 137, fracción VI, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. El último precepto normativo prevé como elementos de validez del acto administrativo que se encuentre correctamente fundado y motivado. La simple cita de disposición es insuficiente, debe tratarse de aquellas que sean aplicables al caso concreto; además de que la aplicabilidad debe justificarse mediante la expresión de las circunstancias, acontecimientos y razonamientos lógico-jurídicos por lo que la autoridad determinada que el actuar del gobernado se ajusta a lo establecido por dichas disposiciones que a su juicio encuadra en la hipótesis prevista en una norma jurídica. Tal imperativo legal es inobservado por la autoridad demandada al emitir el acto que ahora se impugna.

Para concluir, es pertinente aclarar que la nulidad implorada por ser la procedente, es una nulidad de FONDO (de orden lisa y llana), no de forma, porque la ilegalidad que actualiza la autoridad es una indebida fundamentación y motivación, no una carencia o ausencia total de la misma, por ende los efectos de la sentencia que resuelva el presente asunto estarán dirigidos a dejar sin efectos el acto impugnado y reconocer el derecho a la devoción solicitada, toda vez que los particulares no estamos obligados a resentir las consecuencias de los actos administrativos ilegales…

Previo a concluir, manifiesto que suponiendo sin conceder razón que quien haya elaborado la boleta de infracción haya sido una autoridad competente para ello, los agentes o policías viales no cuentan con fe pública, por lo que las manifestaciones que realizan en las actas de infracción no pueden ser tomadas como una verdad legal absoluta, pues de esa manera se estaría violando la garantía de seguridad jurídica tutelada constitucionalmente, ya que el elemento policía vial estaría siendo testigo, juez y parte dentro del acto emitido, situación que legalmente no puede ser llevada a cabo...

TERCERO.- Además de lo anterior, si la boleta de infracción está viciada de nulidad por encontrarse indebidamente fundada y motivada o por ser emitida por una autoridad incompetente, por lo tanto, los actos que deriven como consecuencia de ella se deberán declarar nulos al ser fruto de un acto viciado…

CUARTO.- Es menester hacer referencia a lo dicho por la autoridad demandada, dentro de su escrito de contestación, pues manifiesta que quien suscribe presente la demanda fuera del término que dispone el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues manifiesta que me hice sabedor del acto en fecha 11 de junio de 2022, situación por demás errónea, pues la autoridad demandada aprecia los hechos de manera distinta a como ocurrieron, pues del escrito inicial de demanda, ese H. Juzgado se puede percatar que en fecha 11 de junio de 202, fui notificado del acto demandado, mismo día que fue sábado, es decir un día inhábil, por lo que surtió sus efectos hasta el día siguiente hábil, es decir el 13 de junio de 2022, comenzando a correr el termino hasta el día 14 de junio de 2022, lo anterior tiene su fundamente (sic) en el artículo 33 fracción I y II del Código suprarreferido.

Por lo anterior realizando el computo respectivo y a sabiendas que el primer día hábil en donde comenzó a correr el plazo fue el día 14 junio de 2022, el termino venció el día 08 de agosto de 2022, misma fecha en que fue interpuesta la demanda respectiva. Lo anterior derivado de una correcta aplicación del Código de la materia.

QUINTO. Por otro lado, y si el computo anteriormente citado no fuera trascendental para ese H. Juzgado, es importante decir que, no se actualiza la causal de improcedencia alegada por la autoridad demandada, en virtud de que como consta en autos, el acto de autoridad que se demanda no contiene la vía y plazos para la impugnación, es decir no contiene los medios de defensa que el ciudadano no tiene para hacer valer sus derechos. Por lo que conlleva a determinar que la presentación de mi demanda ES OPORTUNA, en cualquier tiempo…

Razón por la cual las manifestaciones vertidas por la demandada, resultan por demás infructuosas e inoperantes, por lo tanto no se deben tomar en cuenta lo vertido por mi contraria con respecto a que EXISTE ALGUN CONSENTIMIENTO RESPECTO DEL ACTO DEMANDADO, por lo que se reitera, señalar bajo protesta de decir verdad que del acto impugnado me fue notificado el día 11 de junio de 2022, sin que se me haya señalado dentro de los actos que se demandan los plazos, términos y vías en las que puedo defender mis derechos, lo que se puede cerciorar con las documentales aportadas, en razón de lo anterior, la demandada no cuenta con la posibilidad de considerar que dentro del presente proceso se haya actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción IV del artículo 261, Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ya que el presente Proceso de Nulidad fue promovido dentro del término estipulado en el Código de la materia, siendo incuestionable la confusión que invade a la autoridad, siendo procedente que se entre al estudio del fondo del asunto planteado ante ese H. Juzgado.

Por lo anterior, es que se desprende que la autoridad demandada no logra acreditar las causas de improcedencia y sobreseimiento que pretende hacer valer, valiéndose de mentiras y engaños y por ende no se actualiza la fracción IV del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.”

La autoridad recurrida en la contestación de la ampliación de demanda manifestó lo siguiente:

En cuanto al primer agravio que manifiesta el actor se le causa en razón de que desconocía el contenido de la boleta de infracción número 178237 de fecha 11 de junio de 2022, es totalmente falso el que el actor desconociera el contenido toda vez que al momento de que se le infraccionó de ele (sic) entregó la copia de dicha boleta, el mismo mediante confesión expresa esta admitido que fue infraccionado el día 11 de junio de 2002 (sic), por lo tanto ese mismo día conoció el acto que motivó su demanda, misma que en su momento procesal debe de decretarse improcedente, en virtud de que fue presentada dicha demanda fuera del término de 30 días después de hacerse saber el actor del acto de la imposición de la infracción de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que a la letra dice… y es el caso que en el asunto que nos ocupa, EL ACTOR… SE HIZO SABEDOR DE ACTO QUE IMPUGNAEL 11 ONCE DE JUNIO DE 2022, POR LO TANTO AL REFERIDO ACTOR LE EMPEZO A CONTAR EL TERMINO DE 30 DIAS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2022, Y LE FENECIO EL DIA VIERNES 5 DE AGOSTO, en razón del periodo de vacaciones del juzgado en el mes de julio, pues dicha demanda debio de haberse presentado el dia de agosto y no el dia 8 de agosto tal y como se desprende del sello impreso de recibido de la demanda correspondiente por parte de la secretaria de ese H. Juzgado a su muy digno cargo de donde se desprende que la demanda que nos ocupa fue presentada el día 8 de agosto del año en curso, ahora bien el hecho de que el actor haya pagado la infracción correspondiente hasta el 14 de junio, eso no impide que el termino de los 30 días empiece a contarse hasta después de haberse realizado el pago de la infracción correspondiente. Con dicho sello se acredita plenamente el día y la hora en que fue recibida la demanda que nos ocupa en autos, prueba que se ofrece por esta parte demandada para que surta sus efectos legales y en su momento procesal oportuno sea tomada en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente.

En cuanto a lo manifestado por el actor… relativo a lo que él llama acto novedoso, y que lo señala como PRIMERO la boleta de infracción 178237 de fecha 11 de junio de 2022, y que señala que la misma no cumple con el elemento de validez señalado en la fracción IV del artículo 127 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y que según el actor se encuentra indebidamente fundada y motivada, lo aseverado por el actor se encuentra totalmente desvirtuado con el contenido del referido documento en cita, toda vez que dicha boleta reúne plenamente tanto la fundamentación propia que contempla la infracción cometida por el actor… así como la debida motivación de tiempo, modo y lugar en conde (sic) su (sic) cometió la infracción que motivo el presente asunto, y por tanto el acto combatido por al (sic) multicitado actor no es ilegal.

En cuanto al punto que el actor señala como tercero en donde se argumenta que la boleta está viciada por encontrarse indebidamente fundada y motivada por ser emitida por autoridad incompetente, al respeto manifestamos que el actor se encuentra en un error, toda vez que en autos se encuentran acreditados con los respectivos nombramientos la competencia en el ámbito de nuestra labor que desempeñamos.

En cuanto al punto cuarto en donde señala el actor que el término de los 30 días le empieza a contar efectivamente el día 13 que fue el primer día hábil del día de la infracción, y conforme al artículo 263 del ordenamiento legal invocado, señala de forma categórica que el término de 30 días empieza a contar al día siguiente en que se hace sabedor de su contenido o de su ejecución. Pues no hay que confundir el contenido del referido artículo en donde establece dos supuestos el primero el término de 30 empezará a contar a partir de que haya surtido efectos la notificación, y el otro supuesto es el día siguiente en que se haga saber del acto, y en la especie el actor reconoció el acto él mismo día 11 de junio y por lo tanto el término de 30 días empezó a contar el día 13 de junio por ser el primer día hábil después del día de la infracción.

En cuanto al quinto punto señalado por el actor en donde señala que su demanda fue presentada de forma oportuna, es totalmente errónea dicha aseveración, porque su demanda fue presentada hasta el día 8 de agosto de 2022, cuando debió de haberse presentado el día 5 de agosto de 2022.”

**QUINTO.-** De lo anterior se colige que, en tratándose de los conceptos de impugnación expresados por el actor, dichos conceptos resultan fundados, luego entonces, le asiste la razón al recurrente, lo anterior es así en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas:

El artículo 16 del Pacto Federal, establece:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Es evidente que, el numeral citado, no se surtió en la especie, dado que el recibo de pago número de folio No. 28944 –AE, de fecha 14 catorce de junio de 2022 dos mil veintidós, es un acto administrativo viciado, por una parte se señalan diversos numerales, correspondientes a los preceptos normativos del Reglamento de Tránsito de esta Municipalidad, y por otra, no se motivó debidamente.

La fundamentación y motivación de todo acto administrativo, debe contener los siguientes elementos: a) Preceptos legales aplicables; b) Relato pormenorizado de los hechos, incluyendo elementos temporales, espaciales y circunstanciales; y c) Argumentación lógica jurídica que explique con claridad la razón por la cual los preceptos de ley que tienen aplicación al caso concreto, es necesario puntualiza que por **fundar** ha de entenderse la expresión de los preceptos legales aplicables al caso concreto y **por motivar**, la exposición de los hechos y razonamientos lógico jurídicos que expliquen porque es aplicable el derecho positivo al caso en concreto. Sirve de sustento al argumento vertido supralíneas, la siguiente Jurisprudencia, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte - 2, página 622, Tesis No. VI. 2º. J/31, que a la letra dice:

*“****FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.****- Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto…”.*

Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 64, abril de 1993, Tesis VI.2º .J/284, página 43 que a la letra dice:

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.-*** *De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.”*

*“****FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-*** *De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.” Jurisprudencias: Informe 1978, Segunda Sala, Tesis 3, Pág. 7*

*“****FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTO.-*** *La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero estos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que el acto de autoridad sí se dan motivos pero estos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 283 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más oportunidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamiento. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del número 239 del propio código.” Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Marzo de 2002, tesis I.6º, A. 333 A, página 1350.*

De igual modo deviene ilegal la calificación de la supuesta infracción de tránsito (de fecha 11 once de junio de 2022 dos mil veintidós), porque incide en el supuesto de ilegalidad contemplado en la fracción IV del citado artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, toda vez que el cuerpo del documento sólo obra la firma autógrafa del servidor público que califica la falta, sin embargo, carece de la manifestación expresa del cargo de dicho funcionario, circunstancia que indebidamente le irroga agravio al justiciable, pues desconoce si quien suscribe es efectivamente la persona física envestida de carácter de autoridad formal y materialmente competente para imponer sanciones en materia de tránsito.

La fracción V del artículo 137 del Código que regula esta materia, establece como elemento de validez de todo acto administrativo, además de constar por escrito, DEBE INDICARSE LA AUTORIDAD DE LAS QUE EMANE Y CONTENER LA FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE CALIFICA LA INFRACCIÓN, dejando con ello en un completo estado de indefensión al recurrente, robustece a lo anterior los siguientes criterios emitidos por el Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro Estado.-

*“****COMPETENCIA. LA AUTORIDAD QUE CALIFICA LA INFRACCIÓN DEBE FUNDAR SU****. Para que la competencia de la autoridad que calificó una infracción a la ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato se funde legalmente en los términos de la fracción VI del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es menester que en el recuadro correspondiente se establezcan el nombre, cargo y firma de la autoridad emisora, con la finalidad de dar a conocer al gobernado el carácter con el que el servidor público suscribe el documento correspondiente y, así, esté en aptitud de examinar si su actuación se encuentra dentro de su ámbito de competencia. (Toca 216/08.PL. Recurso de Reclamación interpuesto por Daniel García Razo, en su carácter de autorizado del Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Resolución de fecha 11 de febrero de 2009).”*

***CALIFICACIÓN LEGAL DE LA INFRACCIÓN. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA.*** *De conformidad con lo que establece el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para que el acto administrativo sea legalmente valido debe reunir una serie de requisitos, entre otros, que sea emitido por escrito y por autoridad competente, de tal forma que, para que se tenga como legalmente pronunciado, es necesario que la autoridad invoque los preceptos legales en que funde su competencia; de tal suerte que, si el documento original no ostenta sellos alguno de la dependencia ni el nombre y cargo del servidor público que calificó la boleta de infracción, los preceptos legales que se citan en la misma no pueden entenderse aplicados por autoridad competente, presupuesto necesario del acto de molestia, sin el cual no es dable que produzca efecto jurídico alguno en perjuicio del hoy actor. (Exp. 200/4ª Sala/08. Sentencia de fecha 16 de julio de 2008. Actor: Martin Rodolfo Muñoz.)*

Quien juzga, no pasa por alto que, la demanda, en la contestación de la demanda del presente proceso, pretendió fundar y motivar el acto que se impugnó, lo cual es una clara violación a los artículos 14 y 16 del Código Político, artículo 2 de la Constitución del Estado de Guanajuato, artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y articulo 282 primer párrafo del Código que regula esta materia, sirve de apoyo el siguiente Criterio emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa de nuestra Entidad Federativa:

***CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. NO ES EL MEDIO PARA EXPRESAR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO.-*** *Conforme a lo dispuesto por el artículo 76, párrafo primero, de la Ley de Justicia Administrativa, en la contestación de la demanda las autoridades no pueden aportar los motivos y fundamentos de derecho del acto que se reclama, ya que en ello se violaría el principio de legalidad y seguridad jurídica que preserva el dispositivo mencionado. (Exp. 3.446/01, sentencia del 14 de mayo de 2002. Actor: Noe Mascot Uribe.)*

De igual forma, tiene aplicación por analogía la Tesis: V-TA-2aS-70, Época Quinta, Instancia: Segunda Sección, Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 48. Diciembre 2004, visible en la Página: 311, que reza:

***FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- NO PUEDE MEJORARSE EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-*** *El artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, establece que en la contestación de la demanda de nulidad no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En ese tenor, no es dable para este Tribunal analizar los nuevos fundamentos introducidos por la autoridad en la contestación de demanda, sino que debe constreñirse a estudiar si es legal o no la fundamentación y motivación expresamente señalada en el acto combatido, pues la autoridad no puede jurídicamente mejorar la fundamentación y motivación que consta en el acto impugnado.”*

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO.*** *Las autoridades responsables no cumplen con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente las resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho y las consideraciones legales en que se apoyan, cuando éstas aparecen en documento distinto.” Octava Época, Registro: 219728, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, IX, Abril de 1992, Materia(s): Administrativa, Tesis: Página: 509.*

*“****AUTORIDADES. FUNDAMENTACIÓN DE SUS ACTOS.-*** *Cuando el artículo 16 dieciséis de nuestra Ley Suprema previene que nadie puede ser molestado en su persona, en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causal legal de su procedimiento, está exigiendo a las autoridades no simplemente que se apeguen, según criterio escondido en la conciencia de ellas, a una Ley, sin que se conozcan de que Ley se trata y los preceptos de ella, que sirvan de apoyo al mandamiento relativo de las propias autoridades, pues esto ni remotamente constituirá garantía para el particular. Por lo contrario, lo que dicho artículo les está exigiendo es que citen la Ley y los preceptos de ella que se apoyen, ya que se tratan de que justifiquen legalmente sus proveídos, haciendo ver que no son arbitrarios. Formas de justificación tanto más necesarias, cuando que de nuestro régimen constitucional las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la Ley.” Jurisprudencia y Tesis sobresalientes 1974-1975, Actualización IV Administrativa, Mayo Ediciones, Pág. 519.*

Una vez satisfecha la pretensión de nulidad, se procede al estudio de las demás pretensiones de nulidad, se procede al estudio de las demás pretensiones:

1. Devolución de la cantidad pagada indebidamente. En su demanda, el actor solicita que le sea devuelta la cantidad pagada indebidamente, junto con las actualizaciones e intereses que se hubieran generado.

Al respecto de conformidad con el artículo 300, fracción V, del Código de la materia, se reconoce el derecho de la parte actora a obtener el reintegro de la cantidad pagada indebidamente, con base en las siguientes consideraciones:

De conformidad con el artículo 143 del Código que regula esta materia, los actos decretados nulos en este proceso no se presumen legítimos ni ejecutables; y, en consecuencia, procede restituir a la parte actora el derecho subjetivo que le fue vulnerado, previa verificación por parte de este Juzgado.

Para acreditar el pago de la multa impuesta con motivo de la infracción combatida, la parte actora exhibe en su demanda la documental consistente en original de recibo oficial de pago número 28944 –AE, de fecha 14 catorce de junio de 2022 dos mil veintidós.

Así de conformidad con lo establecido en lo dispuesto en los artículos 119, 124, 130, 131 y 307K del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa que impera en este Juzgado, dicho comprobante de pago genera convicción en quien resuelve respecto de su existencia y contenido, así como del hecho de que fue el actor quien realizo el pago del mismo, dado que en el mismo obra indicado el número de folio de infracción con el que se vincula, la fecha de emisión del mismo, el concepto que motiva su expedición, así como el monto cuyo pago ampara dicho documento.

Luego, una vez demostrado que la parte realizó el pago de la multa. Así como la ausencia de legalidad en la obligación tributaria que lo originó, se configura el pago de lo indebido, en términos de lo previsto por el ordinal 52, tercer párrafo de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado.

En este sentido, la devolución de pago de lo indebido constituye un derecho del gobernado a través del cual se reincorporan a su patrimonio las cantidades que indebidamente pagó al fisco, por lo que no es ilícito que el fisco retenga una cantidad que le fue pagada sin existir una obligación para ello; de ahí que, lo indebido del pago se actualice al haberse decretado la nulidad de los actos impugnado que obligaron o conminaron el pago al actor.

El artículo 45 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, establece que **las cantidades a devolver por la autoridad hacendaria municipal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, aplicando el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar**, en ese sentido, se declara que la actualización es un concepto que opera de forma adminiculada o subyacente a toda devolución, pues el valor del dinero está sujeto a factores externos que lo condicionan invariablemente, como la inflación o la depreciación monetaria.

Por lo tanto, la devolución cuyo momento asciende a la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), a cargo de la autoridad hacendaria municipal, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, considerándose al efecto el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP), de acuerdo al cálculo establecido en el ordinal 45 de la citada ley hacendaria, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido hasta aquel en que la devolución esté a disposición del contribuyente.

El justiciable, también solicitó el pago de intereses, ahora bien, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, en su artículo 53, párrafo segundo, establece el nacimiento del derecho al pago de intereses por la indebida determinación y cobro de un crédito fiscal, en los siguientes términos:

Artículo 53 (...). El contribuyente que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco el pago de intereses conforme a la tasa que señale la Ley Anual de Ingresos para los recargos, sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago.

Del análisis a la porción normativa transcrita se advierte que la procedencia del pago de intereses en el supuesto mencionado, requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

1. El establecimiento de un crédito fiscal por la autoridad en contra de un contribuyente.
2. La realización del pago de ese crédito fiscal por ese particular.
3. La inconformidad del contribuyente con el crédito fiscal pagado, manifiesta a través del ejercicio de algún medio de defensa legal.
4. La resolución de la impugnación a favor del particular inconforme, declarando la nulidad del crédito fiscal.

Con base a lo anterior, se colige que en el caso sí procede el pago de intereses ya que concurren los elementos apuntados, a saber: 1) Por la comisión de la falta administrativa asentada en la boleta de infracción, folio número 178237, de fecha 11 once de junio de 2022 dos mil veintidós, se impuso al actor una sanción económica; 2) Este realizó el pago de esa multa el día, de fecha 14 catorce de junio de 2022 dos mil veintidós, tal como se desprende del recibo de pago número 28944 –AE y, 3) En contra de la boleta de infracción se promovió el demanda de juicio de nulidad.

Luego entonces, este juzgador estima que el pago de intereses debe formar parte de la sentencia porque al declararse la nulidad total de la boleta de infracción, folio número 178237, de fecha 11 once de junio de 2022 dos mil veintidós, derivado de la cual se le impuso la multa, entonces el pago efectuado por el hoy recurrente se considera como indebido y por ende debe ser devuelto con sus respectivos intereses conforme a la tasa que señale la ley anual de ingresos para los recargos, sobre la cantidad pagada indebidamente y a partir de que efectuó el pago. Ahora bien, el artículo 33, párrafo primero y segundo, de la Ley de Ingresos de San Luis de la Paz, para el Ejercicio Fiscal de 2021 dos mil veintiuno, establece:

Artículo 33. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, se cobrarán recargos a la tasa del 3% mensual.

Los recargos se causaran por cada mes o fracción que transcurra a partir de la fecha de la exigibilidad, hasta que se efectué el pago, hasta por 5 años y se calculará sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que refiere el artículo 49 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, los gastos de ejecución y las multas por infracciones a las leyes fiscales.

Cuando se conceda prórroga o autorización para pagar en parcialidades los créditos fiscales, se causarán recargos sobre el saldo insoluto a la tasa del 2% mensual.

Por lo tanto, el pago de los intereses se hará conforme a la tasa del 3% tres por ciento mensual sobre la cantidad enterada, mismos que deberán pagarse desde la fecha en que se realizó el pago y se cubrirá por cada mes o fracción que transcurra, desde esa fecha hasta aquella en que se realice el pago o devolución correspondiente.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XVI. 1º. A.T.13 A (10ª .) sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que señala:

*DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. LOS INTERESES DERIVADOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD FISCAL A EFECTUARLA DEBEN CALCULARSE CONFORME A LA TASA QUE SEÑALE LA LEY ANUAL DE INGRESOS PARA LOS RECARGOS, A PARTIR DE QUE SE REALIZÓ EL PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato distingue dos supuestos en los que procede el pago de intereses con motivo de la devolución de pagos indebidos, a saber: a) Cuando previa solicitud de devolución, ésta no se realice dentro del plazo de dos meses, en cuyo caso serán calculados sobre la cantidad que deba reintegrarse desde que venció ese plazo hasta que se restituya el numerario (primer párrafo), y b) Cuando existiendo pago de un crédito fiscal el contribuyente interponga medio de defensa y obtenga resolución firme favorable total o parcialmente, supuesto en el cual los intereses serán calculados a partir de que se efectuó el pago indebido (segundo párrafo). Así, cuando un contribuyente acude al juicio de nulidad ante la negativa de la autoridad fiscal a devolverle las cantidades enteradas indebidamente y obtiene sentencia favorable que declara la nulidad del acto impugnado y reconoce el derecho relativo, el pago de intereses procede en términos de la segunda hipótesis mencionada, esto es, conforme a la tasa que señale la ley anual de ingresos para los recargos, a partir de que se efectuó el pago.*

**SEXTO.-** Con base en todo lo expuesto, quien juzga decreta la **ILEGALIDAD Y NULIDAD TOTAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS**, para el efecto de que la demandada, en el término de quince días, después de que cause estado la presente resolución, deje sin efectos la boleta de infracción, folio número 178237, de fecha 11 once de junio de 2022 dos mil veintidós, recibo de pago número 28944 –AE, de fecha 14 catorce de junio de 2022 dos mil veintidós y como consecuencia de lo anterior, la demandada, deberá hacer los trámites necesarios para que se haga al actor la devolución de la cantidad de **$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que erogó el actor por concepto de pago de multa, más los intereses del 3% mensual sobre la cantidad pagada por el actor, así como las actualizaciones, mismos que deberán ser pagados desde la fecha en que se realizó el pago y se cubrirán por cada mes o fracción que transcurra, desde esa fecha hasta aquella en que se realice el pago o devolución correspondiente, debiendo informar la recurrida, a este Honorable Órgano Jurisdiccional, el cumplimiento de esta sentencia, lo anterior de conformidad con el artículo 300 fracciones II y III, 302 fracciones II y IV del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.---------------------------------------------------------------------

Toda vez que, se ha decretado la nulidad total de los actos impugnados, lógico es que, este Órgano de Justicia, le está reconociendo el derecho que el actor le asiste, derecho que se traduce en la anulación total de la boleta de infracción, folio número 178237, de fecha 11 once de junio de 2022 dos mil veintidós, recibo de pago número 28944 –AE, de fecha 14 catorce de junio de 2022 dos mil veintidós y como consecuencia de lo anterior, la demandada, deberá hacer los trámites necesarios para que se haga al actor la devolución de la cantidad de **$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)**, también, se reconoce el pago de los intereses del 3% mensual sobre la cantidad pagada por el actor, así como las actualizaciones, mismos que deberán pagarse desde la fecha en que se realizó el pago y se cubrirá por cada mes o fracción que transcurra, desde esa fecha hasta aquella en que se realice el pago o devolución correspondiente, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 255 fracciones I, II y III del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa vigente para nuestro Estado.-----------------------------------------------------------------------------------

**SEPTIMO.-** Con la finalidad de no cometer violaciones procesales en perjuicio de las partes que intervinieron en este proceso, por disposición expresa del artículo 117 del Código aplicable a esta Materia, se procede el darle valor a las pruebas ofrecidas dentro de este proceso en el siguiente orden:

El actor ofreció las siguientes pruebas:

1. Recibo de pago número 28944 –AE, de fecha 14 catorce de junio de 2022 dos mil veintidós, y copia simple de tarjeta de circulación, documental que se le da valor probatorio para acreditar la existencia del acto administrativo que se combate dentro de este proceso, así como el interés jurídico del actor.

La autoridad demanda ofrecieron las siguientes pruebas:

1. Documental Pública consistente en copias certificadas de los nombramientos del cargo que ostentan dentro de la administración pública municipal de esta ciudad, documental que se la da valor probatorio para acreditar dicha personalidad.
2. Copia certificada de boleta de infracción, folio número 178237, de fecha 11 once de junio de 2022 dos mil veintidós, recibo de pago número 28944 –AE, de fecha 14 catorce de junio de 2022 dos mil veintidós, documental que ya fue valorada dentro de este proceso.

En mérito de lo expuesto y fundado, y con fundamento en el artículo 244 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y el artículo 1 fracción II, del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa vigente en nuestra Entidad, es de resolverse y se.--------------------------------------------------------------------------------------------

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.-** Este Honorable Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de nulidad, de conformidad con el artículo 1 fracción II del vigente Código de Procedimiento y Justicia Administrativa vigente en nuestra Entidad Federativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------

**SEGUNDO.-** **NO SE SOBRESEE EL PRESENTE PROCESO**, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de ésta resolución.------------------

**TERCERO.- SE DECLARA LA NULIDAD TOTAL DEL ACTO IMPUGNADO**, por lo asentado en el considerando Cuarto, Quinto y Sexto de esta resolución, lo anterior con fundamento en el artículos 300 fracciones II y III y 302 fracciones II y IV del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa vigente para el Estado y los Municipios de Guanajuato.-----------------------------------------------------------------------------

**CUARTO.-** En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja en el libro de registro de este Honorable Juzgado.---------------------------------------------------------------------------------------------------

**NOTIFIQUESE.**-------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo acordó y firma el ciudadano Licenciado Apolonio Cabrera Huerta, Juez Administrativo Municipal, quien actúa legalmente asistido por Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada Juana Yanneth Rivera Aguilar, que da fe.-------------------------------